

## IV.

Tratando de esquivar la dificultad que acabo de exponer, explica el Sr. Lancaster, el adverbio exactamente, en estos términos: "Lo que la Constitucion exige, cuando ordena "aplicar las leyes *exactamente* al hecho, es que no se apliquen á una materia las que correspondan á otra, que no se falle nunca contra ley expresa, que no se atormente su verdadero sentido ni se la desvíe de su objeto, sustituyendo su voluntad con el capricho de los gobernantes ó de los jueces."

Pero ¿dan estas palabras una idea, siquiera remota, de lo que en realidad significa el adverbio *exactamente*? Sin duda que no.

Como el último Diccionario de la Academia española peca por demasiado conciso en sus definiciones, he preferido ocurrir á su edicion primera y á otros diccionarios, que definen mejor las palabras "exactamente," "exactitud."

"Exactamente (dice la Academia española) adv. de modo. Cuidadosa y diligentemente, con puntualidad y fidelidad."—"Exactitud, s. f. Diligencia, primor y puntualidad "en la ejecucion de alguna obra."—Puntual, adj. *Ajustado* "y cierto.

"Exactitud: es la suma justeza de una cosa *que se adapta muy bien á otra, sin que le falte ni sobre lo más mínimo*," segun dice el Diccionario formado por una sociedad de literatos.

El de la Academia francesa, definiendo el adjetivo Exact, dice: "Regular, puntual, cuidadoso, que observa puntualmente *todo aquello que es necesario, hasta en la menor cosa*."

Estas definiciones no dejan duda de que, al hablarse en la segunda parte del artículo 14 de leyes exactamente apli-

cadas al hecho, se quiso dar á entender: que esas leyes debían aplicarse cuidadosa, puntual, ajustada y escrupulosamente al hecho sobre que se ha de juzgar y sentenciar, dando, por supuesto, como era natural, que esas leyes han de ser las adecuadas al caso, ó las que correspondan á la materia de que se trate; y ya se ve, que esta última circunstancia no basta para llenar el requisito de la exactitud en la aplicacion de la ley. Tan cierto es esto, que si un juez condena en México á un acusado de un delito cualquiera, fundando su sentencia en alguno de los artículos del Código penal del Distrito, pero sin que concurren todas y cada una de las circunstancias que el artículo exige, no se podrá decir que ese juez no aplicó la ley que la materia requería; pero sí se dirá, con sobrada razon, que no la aplicó exactamente. Es, pues, seguro, que la exactitud de que habla la Constitucion no es la de que habla el Sr. Lancaster.

En corroboracion de esto citaré una autoridad no sospechosa, la de los cuatro autores del Código civil, que suscriben la parte expositiva de él, y que en la página 7.<sup>a</sup> asentaron sin vacilar, estas palabras: "Si por *exactamente* solo se entiende la aplicacion racional de la ley, la dificultad es menos grave; pero el artículo será siempre peligroso, *por prestarse á varia inteligencia. Pero si esa exactitud se entiende, como debe entenderse, segun su letra y su sentido jurídico, el precepto colocado entre las garantías individuales, da por resultado la más funesta alternativa*."

"Si se cumple con él, se dejan de resolver mil contiendas judiciales; porque cuando no haya ley aplicable al hecho, el tribunal no puede apelar al arbitrio. . . . . y no es ni concebible, cómo un juez puede usar de su arbitrio, si debe aplicar la ley exactamente."

Ahí tenemos paladinamente confesado por cuatro notabi-



lidades de nuestro Foro, citadas por el Sr. Lancaster, (y una de ellas muy conocedora del idioma castellano,) que la exactitud y el arbitrio judicial están en abierta oposicion, que son incompatibles.

No opina así el Sr. Lancaster: pues en su concepto basta lo dispuesto en el artículo 20 de nuestro Código civil, para que se pueda decir con verdad; que, "aun cuando para fundar un fallo en alguna materia civil, no se encuentren expresas determinaciones legales que la comprendan y definan; es entonces posible aplicar exactamente la ley al hecho que se ventile." Pero si dicho señor supone el caso en que no hay ley, yo no alcanzo cómo pueda esto hacerse; porque me parece imposible aplicar, no ya exacta, pero ni aun inexactamente, lo que no existe. Sin embargo, insiste en su afirmacion, "fundado, en primer lugar, en que entonces se puede aplicar exactamente el artículo 20 de nuestro Código civil, que ordena se decida la controversia conforme á los principios generales de derecho; y en segundo lugar, en que tambien estos principios son susceptibles de observarse con exactitud, hasta donde lo permita la falibilidad del criterio." Y ya antes habia afirmado "que segun nuestra legislacion, es decir, conforme al Código del Distrito, en todos los casos en que la ley sea omisa, debe suplirse con los principios generales de derecho, es decir, que estos llenen el hueco, ocupen el lugar y tengan la misma fuerza de aquella."

Mas yo pregunto: ¿En las poblaciones en que no rija dicho Código, ó en las que le hayan suprimido el artículo 20, se podrá apelar á los principios generales? ¿Se podrian haber aplicado en el Distrito, antes de que se promulgara el repetido Código? Indudablemente no: porque entonces faltaria el fundamento único, que es el artículo 20; y entonces tendríamos que no existiria sino en determinados lugares,

la garantía que quiere crear el Sr. Lancaster, siendo así que el artículo 14 de la Constitucion es una ley para toda la República.

Me atrevo á hacer otra pregunta más: ¿Podria ingerirse en el Código penal un artículo concebido en los mismos términos que el 20 del Código civil? Supongo que el Sr. Lancaster no daria una respuesta afirmativa: porque el Sr. Montiel y Duarte, de quien tiene alto y merecido concepto, comentando el artículo 14 en su muy estimable "Estudio sobre garantías individuales," asienta estas palabras: "Dirémos de "paso, que en materias criminales no se aplican penas por "analogía, porque como dice uno de los más grandes hombres de la antigüedad: "Ubi non est lex nec prævaricatio," "(San Pablo, epístola ad rom. capítulo. 4º, versículo 15)."

Eso mismo enseñan los criminalistas modernos. Mr. Treilhard, decia, en la discusion del Código penal frances: "Hé ahí el espíritu del artículo 4º, y de él se debe deducir esta "regla tutelar: que ninguna condenacion puede pronunciar-se, que ninguna pena puede infligirse, si no está apoyada "en texto preciso de la ley. Además, es necesario, que este "texto sea claro, trasparente, de modo que hasta el ciudadano menos instruido pueda comprender la prescripcion."

Ahora bien: si en derecho penal, seria una monstruosidad establecer una regla como la que entraña el artículo 20 del Código civil; si en el artículo 14 están igualados, segun el Sr. Lancaster, y comprendidos bajo la misma prohibicion, los negocios civiles y los criminales; ¿cómo puede ser conforme á la segunda parte de dicho artículo, que en lo criminal no se admita el arbitrio judicial, y sí en lo civil? Lo racional y lógico, es negarlo en ambos, ó permitirlo en uno y otro; de lo contrario resultará una palpable inconsecuencia. Y como de prohibir ó de permitir el arbitrio judicial en los



asuntos de esas dos clases, resultan absurdos y dificultades sin número; no queda más arbitrio para evitar aquellos y estos, que confesar rotundamente: que la segunda parte del artículo 14 habla únicamente de los negocios criminales, y que la primera se refiere á los civiles.

## V.

Tanto por seguir, hasta donde me ha sido posible, el orden con que ha emitido sus ideas el Sr. Lancaster, como para que las observaciones que dejo expuestas quedaran más claras, más desembarazadas y comprensibles; he reservado para este lugar el exámen de la objecion que dicho señor ha hecho en el número 8º de su alegato, y que es incontestable en su concepto.

Despojada de todas las declamaciones apasionadas en que está envuelta, queda reducida á lo siguiente:

“No existe en la Constitucion más que un solo precepto, “que prohiba á los tribunales dar á las leyes efecto retroactivo en el acto de aplicarlas, y este es el que se consignó “en la segunda parte del artículo 14. Esto supuesto,” si se acepta “la doctrina que limita la segunda parte del artículo “14 á las causas del orden criminal, forzoso seria llegar á “una de estas dos consecuencias: O en los juicios civiles es “lícito alguna vez sentenciar por leyes posteriores al caso; “ó el dar efecto retroactivo á una ley en los fallos civiles, “no implica violacion de ninguna de las garantías otorgadas “al hombre.”

La argumentacion del Sr. Lancaster, es, en verdad, ingeniosa; pero muy rebuscada, como quien desconfia de los demás fundamentos que ha alegado. Procuraré contestarla con

la mayor concision posible, para no fatigar, sin necesidad, la atencion del tribunal.

Si se exceptúan las Bases Orgánicas, en ninguna otra de nuestras constituciones se encuentra más disposicion sobre retroactividad, que la que prohibe dar leyes retroactivas, y ninguna, que yo sepa, semejante á la contenida en la segunda parte del artículo 14; y tampoco recuerdo que la haya en la Constitucion de los Estados-Unidos del Norte. Sin embargo, creo que en estos no se ejecutaria ningun fallo en que, á una ley no retroactiva, se le diera el efecto de tal.

Creo tambien: que en ese caso, y en virtud de la primera parte del artículo 14, se puede interponer en negocios civiles el recurso de amparo, aun cuando se dé á la segunda la interpretacion que tanto repugna el Sr. Lancaster: porque cuando se trata de garantías individuales, verdaderamente procede el recurso susodicho, no contra la ley sino contra el acto que viola una garantía, y por eso se previene en el artículo 102 de la Constitucion y en el 2º de su ley orgánica, que las sentencias han de ser siempre tales, que solo se ocupen de individuos particulares, limitándose á protegerlos y ampararlos en el caso especial sobre que verse el proceso, sin hacer ninguna declaracion general respecto de la ley ó acto que la motive. Así es que la violacion la comete la autoridad ó el juez que ejecuta el acto reclamado, y solo contra ellos procede el recurso de amparo; importando muy poco que el acto atentatorio se ejecute en cumplimiento de una ley retroactiva, ó que el juez la convierta en tal, no siéndolo; pues antes bien hay mayor razon para impedir el atentado en este segundo caso que en el primero.

Fúndase esto, en que la razon única por la cual están prohibidas las leyes retroactivas, es porque atacan ó destruyen derechos legítimamente adquiridos con anterioridad; y como



este mismo resultado producen los fallos en que se da efecto retroactivo á una ley posterior; se infiere rectamente, que es tan procedente contra ellos el recurso de amparo, como lo es contra los actos que se fundan en leyes retroactivas; puesto que hay la misma razon en uno que en otro caso, por la trilladísima regla de derecho "Ubi eadem legis ratio, ibi eadem dispositio."

Pero todavía hay otra razon más poderosa, á mi juicio, para sostenerlo así, y es: que cuando se prohíbe una cosa, se entiende prohibido también todo aquello que tienda á llevar á cabo lo que se propuso evitar el legislador, conforme á este principio racionalísimo "cum quid prohibetur, prohibetur omne per quod pervenitur ad illud."<sup>1</sup> Luego si, dando el juez efecto retroactivo á una ley, despoja á alguien de derechos adquiridos legítimamente; como contraría la intencion que el legislador se propuso al prohibir las leyes retroactivas, tiene sin duda el agraviado el recurso de amparo, en ese caso, como lo tendrá siempre que se aplique contra él una ley retroactiva en negocios civiles. Y no es esta una teoría inventada por mí para salir de la dificultad; es lo que ha hecho la Suprema Corte en varias ejecutorias, y una de ellas es la de 13 de Marzo de 1876.

Esto me parece que no admite contradiccion; mas aun cuando me equivocara, lo único que probaria el argumento del Sr. Lancaster, seria que habia un vacío en la Constitucion, vacío que no podia llenarse sino por los medios que ella misma ha determinado. Y digo esto, porque mientras los fundamentos que se han alegado en favor de la opinion que yo sostengo, no sean desvanecidos completamente; no puede tener fuerza un argumento fundado en un simple inconveniente, que como he dicho no existe en realidad.

<sup>1</sup> Salgado de Requie. Protec. Po. 2ª C. 16 núm. 61, y ley 16 2. de Sponsalibus.

## VI.

Alguna más fuerza que el argumento que acabo de contestar, tiene el que se apoya en una serie de ejecutorias pronunciadas por la Suprema Corte que precedió á la actual, y en las cuales se amparó á diversas personas contra fallos pronunciados en negocios civiles; porque segun el Sr. Lancaster, han dado el carácter de una verdad legal incontrovertible, á la interpretacion de la segunda parte del artículo 14 en el sentido de que comprenda tanto los negocios civiles como los criminales.

No puede negarse que la práctica de los tribunales, ó como la llaman los franceses, la jurisprudencia de las ejecutorias, tiene bastante autoridad; pero esta nunca puede llegar á igualarse con la de una ley, entre nosotros ni en otras naciones; porque no se les ha dado esa fuerza, y porque siempre se ha tenido como un axioma esta declaración de Justiniano: "Non exemplis sed legibus judicandum est."

Mas aun cuando así no fuera, como no se ha probado ni se probará, que ha habido una larga y no interrumpida serie de ejecutorias de este tribunal, dando á la segunda parte del artículo 14 una interpretacion extensiva á los negocios civiles; nada han conseguido los que pretenden que esta es una verdad incontrovertible. Y digo que no se podrá probar que exista esa serie no interrumpida de ejecutorias, porque todas las que he visto se fundan simplemente en el artículo 14, sin expresar en cuál de sus dos partes; así es que nosotros podemos decir que en la primera por las razones que voy á exponer. Pero hay más: en el juicio de amparo promovido por D<sup>a</sup> Dolores Noriega de Sáyago, por ha-



berse dictado una sentencia contra ella, aplicando retroactivamente el Código de procedimientos civiles, en un juicio hipotecario; este tribunal la amparó en su ejecutoria de 13 de Marzo de 1876 antes citada. Mas sea de esto lo que fuere, hablemos de la fuerza que en general tienen las ejecutorias.

Confieso con gusto, el alto concepto en que tengo á muchos de los señores Magistrados que nos precedieron, y que por su profundo saber en derecho, por su probidad y por otros mil dotes estimables, merecen mi respeto y consideracion; pero á pesar de esto, no creo que los Magistrados actuales ni los que vengan despues, deban someterse á seguir ciegamente en los negocios que hayan de fallar, las opiniones de sus antecesores, aun cuando no les parezcan acertadas: porque eso seria lo mismo que esclavizar su conciencia y su razon, arrebatarles su independencian, degradarlos y hacerlos perder todo prestigio.

¡Qué cuando un tribunal haya estado interpretando erróneamente una ley, no podrá volver ya sobre sus pasos, tan solo porque ha permanecido en el error por largo tiempo! Eso seria verdaderamente escandaloso, contrario á la sana razon, y abiertamente opuesto á este principio de eterna justicia: "*Quod non ratione introductum, sed errore primùm, deindè consuetudine obtentum est, in alijs similibus non obtinet.*" (L. 39. D. de legibus).

Por otra parte, como nuestra Constitucion se ha observado poco tiempo; no tenemos todavía, ni ha sido posible que se formara, una jurisprudencia constitucional uniforme; y ha de pasar algun tiempo antes de que exista. Entretanto, es preciso que haya diversidad de opiniones entre abogados y jueces, y aun contrariedad entre las ejecutorias. Esto no es extraño ni censurable, porque es lo que ha pasado y pasa en todas las naciones.

Queda, pues, demostrado que aun cuando entre nosotros tuvieran fuerza de ley las ejecutorias, esto seria solo cuando se hayan dictado en el mismo sentido siempre, y por muy largo tiempo, ó como dijo el Emperador Severo: "*perpetuò similiter judicatarum;*" y como no tienen ese requisito las á que alude el Sr. Lancaster, se debe inferir por una consecuencia forzosa, que no pueden servir de fundamento á su opinion. Hay todavía otra razon para que no le aprovechen, y es: "que los mismos Magistrados que han formado en estos casos la mayoría de la Corte, han establecido que solo procede el recurso, por motivo de aplicarse á un caso una legislacion que no es la propia, como cuando se resuelve un juicio sobre bienes nacionalizados conforme á las leyes comunes, y no con arreglo á la legislacion especial sobre desamortizacion y nacionalizacion de bienes eclesiásticos; <sup>1</sup> y esto no ha sucedido en la graduacion del concurso á bienes de D. Blas Pereda.

Pero ¿es acaso cierto, absolutamente hablando, que las leyes que tratan de una materia no se pueden aplicar á otra materia diversa? En verdad que no, y para probarlo bástame decir que la venta y el arrendamiento son materias diversas, que tiene cada una su legislacion particular; y sin embargo, es doctrina tan antigua como sabida, que las leyes sobre arrendamientos son aplicables á la venta, y vice versa, en todo aquello en que su legislacion propia no basta para decidir una cuestion. <sup>2</sup>

He dicho antes que en otras naciones no se admite como ley la jurisprudencia de las ejecutorias, y para probarlo permítaseme citar las doctrinas de los célebres jurisconsultos

<sup>1</sup> Lozano. Tratado de los Derechos del hombre, pág. 255.

<sup>2</sup> Alfaro de Oficio fiscalis, con otros muchos A. A. que cita en el número 52 de la glosa 24.



franceses: Mr. Dupin y Mr. Mailher de Chassat. Dice el primero, hablando precisamente de esta materia: "Si tantos obstáculos hay que vencer en la carrera de las ciencias, ¿nos lisonjearíamos de tener en la de la jurisprudencia un acceso más fácil á la verdad, cuando además de todas las espinas sembradas en el camino del juriconsulto, es preciso todavía destruir tantos medios como emplean las pasiones más exaltadas para oscurecerla, alterarla y ponerla inconcible?"

"También los Tribunales soberanos se empeñan diariamente en perfeccionar la jurisprudencia, sobre cuestiones muy importantes. *Ejecutorias posteriores contrarias á las precedentes hacen conocer casi siempre la equidad de una Corte, por el sacrificio que hace de sus pasadas decisiones, á la verdad mejor conocida, ó á la diferencia mejor pesada de los casos.*"<sup>1</sup>

En ese mismo sentido se explica Mr. Mailher de Chassat. "Yo afirmo, dice, que las ejecutorias de ningún modo pueden coartar la independencia de la razón; que los tiempos, las pasiones, los recursos diversos del interés privado, podrán fácilmente acreditar el error y hasta hacerlo consagrado; pero jamás podrá ninguna prescripción impedir la vuelta á los principios, ó al sentido primitivo y desconocido de la ley: que á la razón pertenece siempre el deber de rehabilitarlo; que aunque es cierto que la jurisprudencia no es ni debe ser más que la emanación de la doctrina, la doctrina á su vez recibe su carácter y su fuerza de la razón."<sup>2</sup>

El mismo escritor, en otra de sus obras, asienta la siguiente doctrina que es todavía más terminante: "Hay más: la

<sup>1</sup> Jurisprudence des arrêts, pág. 495.

<sup>2</sup> Traité de la Rétroactivité des lois. Preface, pág. 7.

"jurisprudencia de la Corte de Casación, por uniforme que sea sobre un punto de derecho, no puede impedir que el intérprete haga uso de la interpretación doctrinal. La Corte misma de Casación *puede abandonar una jurisprudencia antigua*; el tiempo, el hábito de regularizar las aplicaciones de una ley, pueden sugerirles nuevas interpretaciones, que solo la ley podría prohibir."<sup>1</sup>

Infírese rectamente de lo expuesto: que las ejecutorias citadas por el Sr. Lancaster, no tienen vigor bastante para impedir que este Tribunal falle hoy, en el sentido que le parezca más justo y arreglado á derecho; ya porque las ejecutorias no tienen fuerza de ley, ya porque son en corto número las que se citan; ya porque hay otras que les son contrarias; y ya, en fin, porque las que se alegan tienen por fundamento único, que en los fallos contra los cuales se pidió amparo, se aplicó una legislación que no era la propia de la materia.

## VII.

No queriendo omitir el Sr. Lancaster ningún argumento, por débil que fuera, llamó la atención en el número 9 de su alegato, á la circunstancia (que él cree significativa) de que los legisladores emplearon en el artículo 14 la palabra *hecho* y no la palabra *delito*.

Pero esta debilísima objeción, tiene varias respuestas á cual más satisfactoria:

1ª Si á un delito ó cuasi delito se le puede dar el nombre de hecho, como confiesa el Sr. Lancaster; fundado en la autoridad de Escriche; es inconcuso que no se habló con impropiedad en el artículo 14, empleando la palabra *hecho*, y que

<sup>1</sup> Tratado de la interpretación de las leyes. Pár. 155, nota 1ª



de que así se hiciera, no puede inferirse que se quiso comprender también á los negocios civiles.

2ª Es cierto que la segunda parte del referido artículo quedaria más clara, si se hubiera usado la palabra *delito*; pero no se empleó, porque no se debía emplear, si se queria hablar con propiedad. En efecto: como en el artículo se habla no solo de sentenciar sino también de juzgar, era preciso poner la palabra *hecho*; porque antes de que se pronuncie la sentencia, no puede saberse ni decirse si el hecho de que se trata en un proceso, es delito ó no. Si, por ejemplo, se acusa á alguno de algun homicidio, no se podrá decir con propiedad que cometió un delito, sino hasta que esté pronunciado el fallo: porque hasta entonces constará si él fué ó no el autor, si ejecutó el homicidio por casualidad ó de intento; si obró con derecho ó sin tenerlo.

Esta, y no otra, es la razon de que los criminalistas se valgan de la palabra *hecho*, acto ó accion, y no de la palabra *delito*, cuando no se refieren á uno ya probado y declarado tal, como puede verse en las doctrinas que he transcrito de Story, de Ortolan, de Chauveau y Hélie, y en cualquiera otro de los criminalistas franceses, así como en el discurso sobre los delitos y las penas del Sr. Gutierrez. Y por esto, sin duda, en la Constitución americana se usó de la frase *ex post facto*, es decir, posterior al hecho, al prohibir las leyes retroactivas en materia criminal.

### VIII.

Por conclusion hace el Sr. Lancaster algunos argumentos breves, fundados todos en reglas de derecho. Las dos primeras de que echa mano, están reducidas á que no debe

hacerse interpretacion de una ley, cuando no hay ambigüedad ninguna en las palabras de ella. Pero en primer lugar, contra esas reglas tenemos esta sentencia de Ulpiano: "*Quamvis sit manifestissimum Edictum Praetoris attamen non est negligenda interpretatio ejus.*"<sup>1</sup> En segundo lugar, no se concibe cómo el Sr. Lancaster dice que los términos del artículo 14 son precisos, claros y generalísimos; cuando han dado lugar á tantas cuestiones, cuando muchas personas tan ilustradas como él, y de buena fé, los entienden en sentido contrario. Esa misma diversidad de pareceres, arguye que no hay tal claridad ni precision en las palabras del artículo, y que es absolutamente necesario investigar la mente del legislador. "*Voluntatem potius quam verba spectari oportet.*" (L. 219, D. de verb. signif.) Además de esto, habiéndose manifestado ya los graves absurdos que resultarían de dar una interpretacion extensiva á las palabras del artículo 14, viene muy al caso la siguiente regla de Mr. Dupin, que se apoya en la autoridad de Baldo y Gothofredo: "*Quoties ex verbis legis simpliciter intellectis, praefertur iniquum aequo, recedimus á verbis, et stamus menti rationique legis.*"<sup>2</sup>

Las dos reglas que acabó de asentar, sirven de contestacion á las que cita el Sr. Lancaster para fundar que no haciendo distincion el artículo 14, y siendo sus términos generales, se deben entender con la generalidad con que él los explica. Y digo que sirven de respuesta, porque resultando como resultan, gravísimos inconvenientes de dar al artículo toda la latitud que se pretende, se debe estar no á la letra sino á su espíritu.

<sup>1</sup> L. 1ª, §. II, lib. 25, tit. 4º D.

<sup>2</sup> Dupin. Protego mena juris, tit. 1º, en la nota á la regla 25.



## IX.

Si no me preocupo, creo que he demostrado que la segunda parte del artículo 14 de nuestra Constitucion, se contrae exclusivamente á los negocios criminales: 1º, valiéndome de la interpretacion gramatical de su letra: 2º, apelando á la interpretacion lógica para investigar su espíritu: 3º, exponiendo los graves absurdos é inconvenientes que resultarían de hacerlo extensivo á los negocios civiles, y 4º, contestando los argumentos con que se pretende que así se haga.

Despues de todo lo que he dicho, parece que ya no habrá quien insista en el cargo que antes se hacia á los que sostienen la misma opinion que yo y á mí, de que queremos restringir las garantías individuales. Muy distantes estamos de haberlo pensado siquiera; pero tampoco queremos extender las que consigna la Constitucion, á casos que no están comprendidos en ella: porque opinamos que de uno y de otro modo se desnaturaliza, se conculca y viola el texto constitucional. Lo que hemos hecho no es restringir el artículo 14, sino interpretarlo, explicar su genuino y verdadero sentido, siguiendo el prudente consejo de Ortolan que, hablando de la interpretacion extensiva y de la restrictiva dice: "Es necesario penetrarse bien de que realmente no se trata de extender ni de restringir, pues ni lo uno ni lo otro es permitido á los jueces. La extencion y la restriccion no existen sino en apariencia: se trata únicamente de hallar, de determinar el verdadero sentido de la ley; no de lo que esta debería haber sido para que fuera mejor, más justa ó más útil; sino de lo que es en realidad, ni más ni menos, suponiendo que ha sido comprendida bien, y entendida jurídicamente." <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Núm. 1633 citado ántes.

Otras muchas razones pueden alegarse en pro de la opinion que defiende, y las expondrán sin duda algunos de los señores Magistrados, mejor que yo podria hacerlo. Las omito por esto, y porque mi muy quebrantada salud no me permite extenderme más. Esta causa me obliga tambien á no examinar en estos informes apuntamientos, la cuestion de si se aplicó exactamente ó no la ley, en la graduacion de los créditos pasivos de D. Blas Pereda: cuestion que solo tendrá cabida, si este tribunal declara que la segunda parte del artículo 14 comprende tambien los negocios civiles. No creo que esto suceda; pero aun en ese caso estaria yo contra el amparo, por los muy sólidos argumentos que, con notable habilidad y lucidez, expone sobre este punto el Sr. Lic. D. Indalecio Sanchez Gavito, en la parte cuarta y siguientes del opúsculo que ha publicado con el título de "Estudio de derecho constitucional y civil," que conocen ya todos los señores Magistrados.

En conclusion, y por las razones que dejo expuestas, mi voto es, que: No ha lugar al amparo que han pedido los Sres. Larrache y C<sup>as</sup>, contra la sentencia de graduacion que causó ejecutoria, en el concurso á bienes de D. Blas Pereda.

#### Voto del C. Presidente Vallarta.

##### I.

El notable alegato presentado por el Sr. Lic. D. Alfonso Lancaster Jones ante el juzgado segundo de Distrito sosteniendo la procedencia de este amparo, trae de nuevo á dis-